

¿Modelo agotado o inexplorado?

Eduardo Engel*

“Chile entre dos derechas” se titula la reciente carta abierta del diputado socialista Sergio Aguiló, la cual ha generado un interesante debate público. La principal conclusión del documento es que los gobiernos de la Concertación se han dedicado a administrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura, agregándole mayor sensibilidad social. Este modelo, agrega el diputado, está agotado, por lo cual es hora de pasar a un esquema con un rol mucho más activo del Estado en la provisión de servicios esenciales, tales como educación y salud.

Más importante que la conclusión anterior es el estado de ánimo que Aguiló transmite en las primeras carillas de su carta. Parte describiendo una situación conmovedora que ilustra las dificultades que enfrentan niños pobres (y de alto riesgo social) para acceder a los mejores colegios públicos. A continuación se refiere a los miles de jóvenes que no acceden a la educación superior exclusivamente por razones económicas. La parte introductoria concluye mencionando las deficiencias de la salud pública, donde más de 150 mil personas están en listas de espera para ser atendidas por especialistas.

Comparto la frustración de Aguiló con cada uno de los temas anteriores (y otros que no cubro por motivos de espacio), pero creo que la manera de resolverlos es diametralmente opuesta a la que él propone.

Partamos por el acceso a la educación superior. Todos pensamos que quienes son capaces pero carecen de medios económicos debieran poder estudiar en la universidad. Sin embargo, esto no significa que la universidad deba ser gratuita para ellos. Los recursos de que dispone el estado son limitados y deben gastarse en los más necesitados y vulnerables. Quienes eventualmente tengan títulos universitarios no estarán en estos grupos, luego es injusto destinarles recursos que podrían dedicarse, por ejemplo a quienes ni siquiera terminaron su educación básica.

Teniendo en cuenta lo anterior, la discusión debiera centrarse en cómo mejorar el diseño del crédito universitario de modo que los alumnos capaces efectivamente puedan estudiar, para que los beneficiados paguen sus deudas, etc.

Pasemos ahora al tema de la salud pública. Los recursos estatales destinados a esta área prácticamente se triplicaron durante los gobiernos de la Concertación, sin que los usuarios percibieran

mejoras ni cercanas a las que cabía esperar luego de un aumento de este tipo. ¿Qué pasó? La gestión hospitalaria sigue siendo muy deficiente, en gran medida porque la mayoría de los médicos son malos gestores (y están muy bien organizados para defender sus intereses corporativos).

Lo anterior no debe interpretarse como una defensa de las isapres. Estas muchas veces han actuado con criterios cortoplacistas, y la mala imagen que tienen entre amplios sectores de la población es, en buena parte, merecida. La conclusión a que quiero llegar es otra: el problema de la salud en Chile no es escoger entre salud pública y salud privada, sino lograr, al menor costo posible, que todos los chilenos tengan acceso a una salud digna. Y lo de “menor costo posible” es central en un país todavía relativamente pobre, donde no sobran los recursos.

Una reforma de la salud debe comenzar con una mejora importante de eficiencia en el uso de los recursos públicos; sólo entonces la autoridad podrá legítimamente plantearle a la ciudadanía un eventual aumento de impuestos para financiar una salud digna para todos.

Pasemos ahora al tema de la educación básica y media pública. Que los colegios se fijen en sus resultados en el SIMCE y la PAA es positivo. En efecto, si mi hijo está en un colegio con malos resultados en la prueba SIMCE y, a la vuelta de la esquina hay otro colegio con resultados mucho mejores, tendré argumentos bastante sólidos para “exigir una explicación”. Tener acceso a indicadores de calidad educacional es particularmente valioso para apoderados con poca educación, ya que éstos suelen ser quienes tienen menos elementos para evaluar los colegios donde educan a sus hijos.

Cabe notar que durante la mayor parte de los '90, los resultados del SIMCE no fueron públicos, probablemente por la presión del Colegio de Profesores sobre el gobierno.

Ahora vamos al problema que denuncia el diputado Aguiló, según el cual el deseo de obtener buenos puntajes en la prueba SIMCE lleva a algunos colegios a rechazar a estudiantes en riesgo social. Para atacar este problema lo correcto no es eliminar las evaluaciones del desempeño escolar, sino que combinarlas con incentivos adecuados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debiera premiar a los colegios de acuerdo al resultado SIMCE que obtienen, corrigiendo por los niveles socioeconómicos de sus pupilos. Mientras más pobres sean los alumnos de un colegio, mayor debiera ser el premio que reciben los profesores de dicho colegio por lograr un puntaje SIMCE determinado. Lo anterior no es ciencia ficción: Alejandra Mizala y Pilar Romaguera, economistas del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile, han diseñado una metodología que llevó a que más de un tercio de los colegios de Huechuraba, Lo Espejo, Independencia, Pedro Aguirre Cerda y Renca fue premiado con recursos adicionales para sus profesores por tener una buena evaluación en comparación con escuelas similares (véase el reportaje en La Tercera del viernes pasado).

En resumen, una economía de mercado puede ser utilizada para favorecer a los ricos o a las grandes mayorías, todo depende de cómo se diseñan las políticas. O en palabras de Germán Correa, quien al igual que Aguiló es socialista: “no me molesta [...] aprovechar todo lo positivo de la economía de mercado para conseguir resultados eficientes que además favorezcan a la gente”. Lejos de agotada, una aplicación sin temores del abanico de posibilidades que ofrece una economía de mercado constituye la mejor opción para derrotar la pobreza y construir una sociedad más justa. Ese es el desafío.

***Eduardo Engel es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Yale.**